ANALISIS DE LAS CAUSAS DE LA DELINCUENCIA JUVENIL Y LA
EFECTIVIDAD DE SUS SANCIones EN LA CIUDAD DE CARTAGO- VALLE
DEL CAUCA EN LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DE 2013 A 2015

VANESSA CUARTAS OSORIO
LILIANA MONTEJO SANTOS
LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRY

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
FACULTAD DE DERECHO
ESPECIALIZACION EN DERECHO PENAL
COHORTE 13
PEREIRA, 2016
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LA DELINCUENCIA JUVENIL Y LA EFECTIVIDAD DE SUS SANCIONES EN LA CIUDAD DE CARTAGO- VALLE DEL CAUCA EN LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DE 2013 A 2015

VANESSA CUARTAS OSORIO
LILIANA MONTEJO SANTOS
LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRY

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
FACULTAD DE DERECHO
ESPECIALIZACION EN DERECHO PENAL
COHORTE 13
PEREIRA, 2016
Análisis de las causas de la delincuencia juvenil

Calificación

Jurado

Jurado
### TABLA DE CONTENIDO

1. **INTRODUCCIÓN** .................................................................................................................. 5
2. **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN** ............................................. 10
   2.1 Pregunta de Investigación .......................................................................................... 12
3. **HIPÓTESIS** ......................................................................................................................... 13
4. **JUSTIFICACIÓN** ................................................................................................................. 14
5. **OBJETIVOS** ......................................................................................................................... 16
   5.1 Objetivo General ........................................................................................................... 16
   5.2 Objetivos Específicos ................................................................................................. 16
6. **MARCO REFERENCIAL** ...................................................................................................... 17
   6.1 Estado del Arte ............................................................................................................. 17
   6.2 Marco Teórico .............................................................................................................. 19
   6.3 Marco Jurídico ............................................................................................................ 20
   6.4 Bloque Constitucional ............................................................................................... 28
7. **DISEÑO DE METODOLOGÍA** ............................................................................................. 31
8. **DESARROLLO TEMÁTICO** ................................................................................................ 33
   **CAPÍTULO I:** ANTECEDENTES DE LA LEY 1098 DE 2006 ........................................ 33
   **CAPÍTULO II:** SOCIOLOGÍA JURÍDICA Y SU RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE LA LEY ................................................................. 37
   **CAPÍTULO III:** TEORÍA COMUNICACIONAL DEL DECRETO Y SU RELACIÓN CON LA LEY 1098 DE 2006 ......................................................... 39
   **CAPÍTULO IV:** ANALISIS JURISPRUDENCIAL .................................................................. 41
   **CAPÍTULO V:** DERECHO COMPARADO .......................................................................... 44
   **CAPÍTULO VI:** LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL SISTEMA PENAL DE ADOLESCENTES EN COLOMBIA ......................................................... 47
9. **CONCLUSIONES** ................................................................................................................... 60
10. **BIBLIOGRAFÍA** ..................................................................................................................... 63
1. INTRODUCCIÓN

La ley de infancia y adolescencia tuvo sus génesis bajo la égida de la protección especial de los niños, niñas y adolescentes, pretendiendo ponerse a tono con la legislación internacional que además lo exigía.

Sin embargo, dentro de esquema planteado en la referida normativa respecto de la responsabilidad penal de los adolescentes, se ha evidenciado una laxitud en la aplicación de las sanciones, generando impunidad, ausencia de medidas eficientes para la resocialización de los menores e inaplicación de la justicia restaurativa.

Por lo que en el presente texto se hace un análisis sobre ese particular, pretendiendo a partir de la sociología jurídica y la teoría comunicacional del derecho, exponer la amplitud de las prerrogativas y libertades consagradas en la Ley 1098 de 2006 y el hecho de que redunde en las falencias del sistema punitivo para menores.

La criminalidad juvenil o también denominado: Delitos cometidos por los adolescentes infractores de la Ley Penal, son en el presente artículo materia de análisis. En este documento, se lleva a cabo una reflexión sobre los temas más importantes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes adoptado por Colombia (Ley 1098 del año 2006); abordado desde el punto de vista de la Justicia Restaurativa; en él, se procura un análisis crítico y constructivo de lo que ha sido el proceso de constitución de
este nuevo sistema judicial, creado y desarrollado para el control y la atención de los adolescentes infractores.

Es evidente que el derecho en una de sus trascendentales funciones asume el carácter de instrumento de construcción social, en tal sentido le compete encargarse de las múltiples problemáticas resultantes del interactuar social de una comunidad. Entre ellas, una de vital importancia en nuestro días es la concerniente a la criminalidad juvenil, es decir, la atención de aquellas conductas o infracciones que son cometidas por personas que aún no cuentan con la edad exigida en el ordenamiento nacional, para poder ser juzgados bajo los parámetros a los cuales es sometida una persona adulta cuando se presentan como los posibles responsables de una actuación presuntamente delictiva.

La evolución y desarrollo del Sistema de Justicia Juvenil en Colombia, y su transformación actual, pasando del Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor) a la Ley 1098 de 2006 (Ley de Infancia y Adolescencia), hizo evidente que en Colombia existía un modelo de justicia juvenil, denominado: "Modelo Tutelar", desarrollado en lo que se conoció como el Código del Menor (Decreto 2737 de 1989), el cual no se encontraba ajustado a la legislación internacional vigente en materia de Infancia y Adolescencia, específicamente en lo preceptuado en la Convención de los Derechos del Niño (1989), norma esta que constituye uno de los instrumentos más importantes de Derecho Internacional en materia de justicia juvenil. Dicho modelo era de igual manera denominado, modelo de bienestar. Los inicios se remontan a su primera concepción con la creación del Tribunal de Chicago de 1899, y se encuentra fundamentado en iguales
postulados del positivismo criminológico y en la doctrina de la situación irregular; en ésta, los adolescentes son protegidos como personas indefensas y necesitadas de cuidado y redención. En cuyo modelo social se considera la delincuencia juvenil como el reflejo de una desventaja social más amplia que no se corrige imponiendo penas, por el contrario el nuevo modelo instituido, es decir el modelo de protección integral, obedece a un conjunto de políticas de atención que cambia de paradigma, deja de considerar al infractor como un ser inferior necesitado de protección y pasa a considerar al menor como sujeto de igual estatus que resulta activo en la aplicación de derechos y la exigencia de obligaciones, en el cual se define su libre desarrollo de la personalidad, requisito indispensable para hacer efectivo el principio constitucional de la dignidad humana.

Es así, como para ese entonces y desde la visión de distintos sectores de la sociedad colombiana, se manifestó la necesidad de actualizar la legislación interna en la materia, para que cumpliera con los propósitos que le exigen el avance y evolución del mundo moderno y de la ciencia jurídica. En el actual momento histórico es necesario tener una visión más amplia del adolescente infractor de la ley penal, y reconocerlo formal y materialmente como una persona en constante proceso de crecimiento y desarrollo psicológico y afectivo, MAIER (1996) así lo indica: "integración de los cambios constitucionales y aprendidos que conforman la personalidad en constante desarrollo de un individuo" (p.35). En tal sentido, es claro que requiere una oportunidad y apoyo del Estado, quien por intermedio de las instituciones que lo encarnan ayuda a su resocialización. Bajo ese tratamiento podrá corregir y construir un proyecto de vida que
se encuentre a la altura de las exigencias sociales, civiles y morales de la comunidad a la que pertenece y en la que interactúa. Los adolescentes como baluarte social de toda nación tienen en un verdadero proceso de resocialización el derecho de instruirse en un arte, profesión u oficio que les permita obtener los recursos necesarios para subsistir de forma honesta, dentro del cual el aspecto jurídico es sólo una de las partes, porque el adolescente, infractor o no, es ante todo un sujeto de comportamiento biopsicosocial, lo que quiere decir que las situaciones biológicas, psíquicas o psicológicas y sociales del individuo articulan un solo conjunto funcional que dirige su comportamiento.

Ya no le importa al sistema penal lo que el joven es, si es huérfano, si su madre es borracha, si en su comunidad no hay luz, no hay agua, o si el joven vive en las condiciones de calle, si ya no le importa al sistema en este momento, sino lo que le interesa lo que el joven hizo, ¿sí? Y entonces, el énfasis de todo este sistema va a ser en las garantías procesales, ya no en el respeto de las garantías sociales (...). (Navarro Benítez pág. 7).

Un análisis detallado de la sociedad en general y de los menores infractores en particular, han permitido hacer evidente algunas causas que originan la criminalidad juvenil, entre ellos: La desarticulación del núcleo familiar, los casos de marginalidad económica que dificultan el acceso a programas de educación, de salud física y mental, de acceso a una vivienda digna, sumado a los índices de violencia intrafamiliar, la pobreza extrema, el reclutamiento a bandas juveniles o de crimen organizado, proliferación de delincuencia infantil y la indiferencia social y estatal; éstas causas, individuales o asociadas, agravan el estado en que se encuentran sectores vulnerables de esta población. Dado al avance continuo de la civilización, el Estado como ente
garantista, debe velar como lo indica Navarro Benítez, en la eficacia de las garantías sociales que el Estado debe ofrecer como unidad gubernamental, para así conferir dispositivos procesales que conlleven a una readaptación social adecuada a las necesidades sociales.

Olvidan los diferentes actores de la colectividad, que no es endureciendo o agravando las penas que se les imponen a los adolescentes infractores como se debe controlar esta problemática; es decir, no es luchando contra los efectos, sino contra las causas de esos comportamientos desviados con los cuales debe hacerse efectivo el tratamiento para combatir estos fenómenos.

Surgen entonces argumentos para endurecer las penas, no siendo ésta la solución más efectiva al problema porque primero que todo es necesario que la sociedad, la familia y el Estado asuman la función que les corresponde de acuerdo al principio de corresponsabilidad (…). (Martínez, J. A. Universidad Libre Seccional Pereira, 2012, p. 135).

El modelo de atención restaurativo, tiene entonces como finalidad la rehabilitación y la resocialización del adolescente, en donde a partir de una estructura pedagógica, teniendo en cuenta los derechos y deberes ciudadanos, se brinde la posibilidad al joven de generar un cambio en su proyecto de vida y en el cual la participación de la familia es fundamental.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia, la Ley 1098 de 2006 introduce un nuevo modelo de justicia para los niños, niñas y adolescentes en general, que se encuentran en conflicto con la normatividad penal. De allí que el Modelo, plantee sanciones que tienen como fin la protección, educación y restauración de los derechos de dichos adolescentes. Por ende, se hace necesario evaluar tanto las sanciones que contempla la enunciada ley, como su desarrollo, alcance y cumplimiento de los diferentes fines, desde los aspectos de eficiencia, efectividad y eficacia.

La falta de efectividad de las sanciones aplicadas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Cartago-Valle, y la tasa de reincidencia en la comisión de delitos que viene presentando el Municipio, desde la implementación de la Ley de Infancia y Adolescencia, misma que ha generado una multiplicidad de sanciones, que están siendo ejecutadas y que en su mayoría no cumplen las función esperada; de ahí se determine analizar su misma funcionalidad, ventajas y beneficios en su aplicación.

Las sanciones que taxativamente están contempladas en el art. 177 CIA y que le son aplicables a los adolescentes en el Departamento de Valle del Cauca y más concretamente en el Municipio de Cartago, en el periodo comprendido entre el año 2013-2015; teniendo en cuenta que dicha institución jurídica está consagrada en el art. 460 del Código de Procedimiento Penal y que este puede ser aplicado, en desarrollo del
principio de oficiosidad o a petición de parte, por expresa remisión aplicable del art. 144 del CIA.

En la ciudad de Cartago, se cuenta con un Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento para adolescentes, mismo que es el encargado de velar por el cumplimiento y vigilancia de las sanciones impuestas a los jóvenes que ingresan al sistema. De manera que se hace necesario señalar que las sanciones que se toman son de carácter pedagógico, específico y diferenciado, respecto del sistema de adultos conforme a la protección de los derechos de los menores.

Sin embargo, las frágiles sanciones impuestas a los adolescentes mayores de catorce (14) años de edad y menores de dieciocho (18) años de edad, al igual que la exclusión de responsabilidad penal para adolescentes menores de catorce (14) años, que cometen delitos ha ocasionado que los índices de violencia y reincidencia delincuencial aumenten de manera significativa, generando que una alarmante elevación de cometidos por adolescentes con estos rangos de edad, lo cual es aprovechado por adultos que utilizan a esta vulnerable población que por su condición de infantes y la debilidad de la justicia penal para imponer sanciones drásticas, hacen que se conviertan en verdaderos delincuentes amparados por esa poca eficiencia de legislación juvenil.

En síntesis, pese a la alta inversión, parece que el estado colombiano se ha quedado corto, pues las sanciones impuestas no parecen ser los suficientemente fuertes, como para corregir a estos adolescentes, que al juzgar por la peligrosidad de sus delitos se han
convertido en promotores de actos delincuenciales, preparados por adultos que logran convencer a éstos infractores, o por ellos mismos, que ya conociendo la ley, saben que no es drástica para ellos, permitiéndoles delinquir.

2.1 Formulación del Problema

¿Qué causas conllevan a la delincuencia juvenil y cuál es la efectividad de las sanciones del Sistema de Responsabilidad penal para adolescentes en la ciudad de Cartago- Valle del Cauca en los periodos comprendidos de 2013 a 2015?.
3. HIPOTESIS

**Hipótesis Positiva**

Se evidencian causales que conllevan a la delincuencia juvenil y la efectividad de las sanciones del Sistema de Responsabilidad penal para adolescentes en la ciudad de Cartago- Valle del Cauca en los periodos comprendidos de 2013 a 2015.

**Hipótesis Negativa**

No se evidencian causales que conllevan a la delincuencia juvenil y la efectividad de las sanciones del Sistema de Responsabilidad penal para adolescentes en la ciudad de Cartago- Valle del Cauca en los periodos comprendidos de 2013 a 2015.
4. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis y estudio a las sanciones impuestas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, específicamente en Cartago-Valle del Cauca, entre los años 2013 y 2015.

De manera que se hará un recorrido desde la experiencia en el diario ejercicio de esta disciplina, con el fin de compartir lo que en la práctica es la ley especial de infancia y adolescencia (Ley 1098, del 8 de Noviembre del 2006) desde los estrados judiciales. Ahora bien, se hace pertinente aclarar que no se pretenden llegar a una respuesta o solución absoluta; sino que, se quiere relacionar algunos elementos que permitan al lector profundizar en el tema y obtener sus propias conclusiones, para lo cual se realizará una apreciación profunda y respetuosa de las sanciones aplicadas a los infractores de la ley penal en Cartago-Valle del Cauca, haciendo un análisis profundo sobre toda la materia y por supuesto exponiendo mi punto de vista como abogada, para permitir que existan contraposiciones de los lectores y puedan tener su propio punto de vista.

De manera que, si bien es cierto que estos actores gozan de especial protección y desbordantes garantías, no es menos cierto que las víctimas carecen de tan abundantes atribuciones, según se ha manifestado con anterioridad, son muchas más las garantías que tienen los infractores que las que tienen las víctimas.
En síntesis, el Estado Colombiano debe garantizar beneficios para las víctimas y debe obligar a que éstas sean reparadas, en todos los aspectos, por los represores de las mismas, sean o no sean de escasos recursos, es un deber principal, que se les devuelva un poco a las víctimas de lo que los infractores les quitaron, no darles las mejores garantías por el hecho de ser menores se deben eximir de sus responsabilidades y las deben ejercer los padres o representantes de los infractores.
5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Determinar las causas que conllevan a la delincuencia juvenil y cuál es la efectividad de las sanciones del Sistema de Responsabilidad penal para adolescentes en la ciudad de Cartago- Valle del Cauca durante el periodo comprendido de 2013- 2015.

5.2 Objetivos Específicos

- Establecer la finalidad y la efectividad de la sanción pedagógica y restaurativa del sistema de responsabilidad penal para adolescente en el Departamento del Valle del Cauca.

- Analizar la idoneidad de la aplicación de la sanción al momento de su aplicación de la sanción al momento de su aplicación sobre el adolescente infractor del sistema de responsabilidad penal.

- Identificar la efectividad de la aplicación de las sanciones en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en Cartago- Valle del Cauca para los años 2013 – 2015.
6. MARCO REFERENCIAL

6.1. Estado de Arte

En revista Saber, Ciencia y Libertad de la Universidad Libre de Cartagena Volumen del 3 de julio de 2010 se publicó un artículo titulado “El Principio De Corresponsabilidad: Análisis Frente A La Reparación De Victimas De Adolescentes Infractores De La Ley Penal” este trabajo hizo referencia a la corresponsabilidad del Estado, la Familia y la Sociedad, por lo cual no difiere del nuestro en virtud a que el mismo pretende determinar la participación del Estado en la reparación de las víctimas de delitos cometidos por adolescentes infractores de la Ley penal; así como el presente proyecto pretende establecer si es efectiva la aplicación de las sanciones en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en Manizales Departamento de Caldas, entre los años 2012 - 2013.

Artículo denominado “Justicia Transicional: Del Código Del Menor Al Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes Propuesta De Acercamiento Al Conocimiento Del Problema De La Administración Interinstitucional Del Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes” el cual en esta investigación giró en torno al “Estudio de caso: La intervención legal, pedagógica y psicosocial, con enfoque de derechos, para la protección integral de los adolescentes en conflicto con la ley, internos en el “Centro de Reeducación de Adolescentes Marceliano Ossa” de Pereira”. y que igualmente abordo el tema de la intervención psicosocial, pedagógica reeducación y
garantistas derechos durante y después del proceso de imputabilidad legal y de la administración de su sanción, por parte de los operadores estatales y privados responsables de administrar interinstitucionalmente el Sistema.

Artículo titulado “Problemas del tratamiento legal y terapéutico de las trasgresiones juveniles de la ley en Colombia”, elaborado por Aramburo, 2009.

El artículo enmarca los aspectos tanto positivos como negativos de la ley de Infancia y Adolescencia implementada en Colombia, indicando el énfasis acertado del restablecimiento de derechos, como finalidad de las sanciones a imponer, pero criticando los conceptos sobre responsabilidad y la forma legal y terapéutica en la que se interviene a un adolescente que desconoce el ordenamiento jurídico penal vigente.


El artículo argumenta el incremento en la ejecución de conductas penales por niños y niñas -incluso con edades inferiores a los 14 años-, ante la implementación de la ley 1098 de 2006, relatando que estos en orden a la criminalidad, comienzan a sustituir la población delictual que oscila entre los 18 y 25 años de edad, determinado ello, en el declive de la intervención policial, ante la judicialización de menores de edad, por no ser claro el procedimiento para algunos servidores y como quiera que el sistema no cumple con la con tarea de rehabilitarlos.
4.2. Marco Teórico

Causas de la delincuencia Juvenil

De acuerdo con la teoría de Cohen sobre las subculturas delictivas, en la cual pone como foco central el análisis a la delincuencia juvenil, haciendo especialmente énfasis en los grupos juveniles de sexo masculino de orígenes en su mayoría de la clase obrera.

Según explica Cohen esta subcultural criminal se caracteriza por lo siguiente:

1) *Es gratuita* (no lucrativa; en el sentido de que los propios hechos criminales no persiguen la obtención de un beneficio económico sino otros objetivos), *maliciosa* (por cuanto la satisfacción deriva precisamente de la disconformidad de los otros), *destructiva* (porque se enorgullece de hacer aquello que es incorrecto según los estándares de las clases medias).
2) Una *actitud* valorativa ambivalente, cuando menos respecto a las normas de la cultura oficial. *Hedonismo inmediato* porque la subcultura propugna una satisfacción inmediata frente a la postergación del placer que caracteriza la actitud de las clases medias. *Espíritu de grupo* en cuanto intolerancia de toda restricción o limitación que trate de ejercerse desde el exterior de la propia subcultura.
3) *La subcultura criminal es una subcultura de grupo y no una solución privada, individual.* (Cita de Urbina Tortolero (2011), a Cohen)

Teoría del patrón del delito

De acuerdo con los autores Paul Brantingham y Jeffrey Brantingham (s.f), esta teoría tiene como objeto explicar la distribución de los delitos en los escenarios urbanos no son uniformes ni aleatorios, sino que por el contrario presentan patrones claramente identificables particularmente influenciados por el
enfoque a actividades rutinarias, definiendo entonces que la distribución del delito es asociado con la distribución de las actividades claves de la comunidad, y es relacionado con la familiaridad que tenga el infractor con los espacios urbanos.

6.3 Marco Jurídico

Ley 7 de 1979, "Por la cual se dictan normas para la protección de la Niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones"

Artículo 61 FUNDAMENTOS PARA LA INDIVIDUALIZACION DE LA PENA. Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo.

El sentenciador sólo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurren únicamente circunstancias de atenuación punitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurren circunstancias de atenuación y de agravación punitiva, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurren circunstancias de agravación punitiva.

Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad
de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto.

Además de los fundamentos señalados en el inciso anterior, para efectos de la determinación de la pena, en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda.

<Inciso adicionado por el artículo 3 de la Ley 890 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> El sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y la defensa.

Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.

Artículo 3°. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.

Parágrafo 1°. En caso de duda sobre la mayoría o minoría de edad, se presumirá esta. En caso de duda sobre la edad del niño, niña o adolescente se presumirá la edad inferior. Las autoridades judiciales y administrativas, ordenarán la práctica de las pruebas
para la determinación de la edad, y una vez establecida, confirmarán o revocarán las medidas y ordenarán los correctivos necesarios para la ley.

**Parágrafo 2°.** En el caso de los pueblos indígenas, la capacidad para el ejercicio de derechos, se regirá por sus propios sistemas normativos, los cuales deben guardar plena armonía con la Constitución Política.

**Artículo 7°. Protección integral.** Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.

**Artículo 10. Corresponsabilidad.** Para los efectos de este código, se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección.

La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado.
No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

LIBRO II

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA CUANDO LOS NIÑOS, LAS NIÑAS O LOS ADOLESCENTES SON VICTIMAS DE DELITOS

TITULO I

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES Y OTRAS DISPOSICIONES

CAPITULO I

Principios rectores y definiciones del proceso

Artículo 139. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.

CAPITULO V

Sanciones
Artículo 177. Sanciones. Modificado por el art. 89, Ley 1453 de 2011. Son sanciones aplicables a los adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal:

1. La amonestación.
2. La imposición de reglas de conducta.
3. La prestación de servicios a la comunidad
4. La libertad asistida.
5. La internación en medio semi-cerrado.
6. La privación de libertad en centro de atención especializado.

Las sanciones previstas en el presente artículo se cumplirán en programas de atención especializados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y deberán responder a lineamientos técnicos diseñados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Parágrafo 1°. Para la aplicación de todas las sanciones la autoridad competente deberá asegurar que el adolescente esté vinculado al sistema educativo. El Defensor de Familia o quien haga sus veces deberán controlar el cumplimiento de esta obligación y verificar la garantía de sus derechos.

Parágrafo 2°. El juez que dictó la medida será el competente para controlar su ejecución.

Artículo 179. Criterios para la definición de las sanciones. Para definir las sanciones aplicables se deberá tener en cuenta:

1. La naturaleza y gravedad de los hechos.
2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y gravedad de los hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad.

3. La edad del adolescente.

4. La aceptación de cargos por el adolescente.

5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez.

6. El incumplimiento de las sanciones.

**Parágrafo 1°.** Al computar la privación de la libertad en centro de atención especializada, la autoridad judicial deberá descontar el período de internamiento preventivo al que haya sido sometido el adolescente.

**Parágrafo 2°.** Los adolescentes entre 14 y 18 años que incumplan cualquiera de las sanciones previstas en este Código, terminarán el tiempo de sanción en internamiento.

El incumplimiento por parte del adolescente del compromiso de no volver a infringir la ley penal, ocasionará la imposición de la sanción de privación de libertad por parte del juez.

**Ley 1153 de 2007.**

**Ley 1453 de 2011. ARTÍCULO 91. SANCIÓN PARA CONTRAVENCIONES DE POLICÍA COMETIDAS POR ADOLESCENTES.** El artículo 190 de la Ley 1098 de 2006 quedará así:
Artículo 190. Sanción para contravenciones de policía cometidas por adolescentes

Las contravenciones de policía cometidas por adolescentes serán sancionadas de la siguiente manera:

Será competente para conocer el proceso y sancionar el Comisario de Familia del lugar donde se cometió la contravención o en su defecto el Alcalde Municipal.

Cuando las contravenciones den lugar a sanciones pecuniarias, estas serán impuestas a quien tenga la patria potestad o la custodia y este será responsable de su pago, el cual podrá hacerse efectivo por jurisdicción coactiva, conmutable con trabajo comunitario.

Los sancionados por contravenciones serán incluidos en programas pedagógicos de educación liderados por las Alcaldías.

✓ El Principio De Corresponsabilidad En El Sistema De Responsabilidad Penal De Infancia Y Adolescencia En Colombia

Definición

Según la Ley 1098/06, define la Corresponsabilidad, como:

“La concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado.”
No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes". (Ley 1098 de 2006, Art. 10).

La corresponsabilidad es responsabilidad compartida entre la familia, el estado y la sociedad, bajo el entendido de que se han implementado una serie de mecanismos tendientes a la mutua regulación; si bien los ámbitos sociales en los que se desenvuelve estos sujetos tienen roles y responsabilidades diferentes frente a los objetivos del derecho, comparten el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos humanos en su integridad y universalidad.

✓ **Garantías constitucionales para adolescentes en las etapas procesales de indagación investigación y juicio oral.**

El estado colombiano proporciona un sin número de garantías al adolescente infractor, amparado en normas y reglas de orden internacional y nacional, con el propósito de cumplir las finalidades propuestas por el sistema: protectora, educativa y restaurativa, grandes beneficios y garantías que el Estado no puede desconocer.

✓ **Ineficacia de las sanciones en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes:**

Teniendo en cuenta las finalidades en el S.R.P.A., es que se hace necesario salvaguardar los derechos e intereses de los menores en conflicto con la ley penal, pero es
necesario aclarar que por ser de carácter pedagógico, son esencialmente diferentes al sistema de adultos, pues las de los jóvenes se deben aplicar con el apoyo de la familia, el estado y la sociedad; esas sanciones en la mayoría de los casos no guardan una proporción adecuada con los delitos cometidos por los menores, simplemente son muy laxas o muy tenues y no convence a los infractores para evitar seguir cometiendo delitos; porque además de rodearlo de tan abundantes bondades, pareciera que lo que se buscara es premiar al infractor por haber cometido el injusto, principio que no es el que se busca cuando se habla de intimidar al que quiera infringir la ley, para evitar la comisión de los ilícitos, proporcionando programas de protección en su favor, teniendo en cuenta las circunstancias individuales de cada adolescente, y sus necesidades especiales, más no la gravedad del delito cometido, es definitivo que las sanciones no son proporcionales con los delitos que se cometen por los infractores.

✓ Garantías en la reparación integral de las víctimas.

Desde nuestra perspectiva observamos que todas estas garantías que rodean a los infractores de la ley penal, no les son extensibles a las víctimas a fin de que logren su reparación, tal como lo expone el modelo de justicia restaurativa, en donde el infractor sea quien sea, debe restaurar o reparar en todo o en parte el daño que le causó a la víctima.

6.4 Bloque Constitucional
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LA DELINCUENCIA JUVENIL

ONU ASAMBLEA GENERAL

CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

REGLAS BEIJING

PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES, Y POLITICOS

CONVENCION AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS/
prohibición de pena de muerte en los menores de edad/ CONVENIO AMERICANA
SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS/ reglas de juzgamiento a menores.

CONVENCION SOBRE DERECHOS DEL NIÑO-Reglas de juzgamiento de
menores/CONVENCION SOBRE DERECHOS DEL NIÑO-Privación de la libertad de
menor

REGLAS DE BEIJING-Objeto/REGLAS DE BEIJING-Incorporación al bloque de
constitucionalidad

REGLAS DE BEIJING-Principios de diferenciación y especificidad en el
tratamiento jurídico penal de menores de edad

REGLAS DE BEIJING-Judicialización de menores como última alternativa

REGLAS DE BEIJING-Pautas en relación con la detención preventiva de menores

REGLAS DE BEIJING-Naturaleza residual de las medidas restrictivas o privativas
de la libertad
REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCION DE LOS MENORES PRIVADOS DE LA LIBERTAD-Protección integral y promoción del interés superior del menor

SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Excepciones a remisión general para la investigación y juzgamiento de adolescentes

CONVENIO 182 DE LA OIT
7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 Tipo de Investigación

Teniendo en cuenta que la presente investigación busca determinar las reglas y subreglas para la procedencia de la extensión de la jurisprudencia, corresponde entonces a una investigación jurídica, pues se pretende determinar las formalidades establecidas en la Ley 1437 de 2011 sobre el particular y su interpretación por parte del Consejo de Estado.

Aunado a lo anterior, se busca analizar la norma en concreto y verificar su aplicación en casos concretos que ya han sido analizados por la jurisprudencia.

7.2 Investigación histórica hermenéutica

El enfoque de la presente investigación es histórico hermenéutico, pues se hará el recuento de la implementación de la figura de la extensión de la jurisprudencia, partiendo de su introducción en la Ley 1437 de 2011, para pasar a analizar los supuestos fácticos y jurídicos señalados por la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la aplicación de este mecanismo considerado como una de las novedades del CPACA para lograr la tutela efectiva de los derechos y libertades consagradas en el ordenamiento jurídico colombiano.
7.3 Método de Investigación

7.3.1 Análisis y síntesis

La presente investigación busca partir de los conceptos generales dados por la doctrina nacional y la jurisprudencia, sobre la solicitud de extensión de las sentencias de unificación y cómo debe ser aplicada por parte de la Administración en la solución de las peticiones.

7.4 Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de la información

7.4.1 Información Secundaria

Como base de la presente investigación se tienen la doctrina nacional y la jurisprudencial sobre las causas de la delincuencia juvenil.
8. DESARROLLO TEMÁTICO

CAPITULO I: ANTECEDENTES DE LA LEY 1098 DE 2006

La creación de la Ley 1098 de 2006, se remonta al año 2002, cuando las entidades gubernamentales en compañía con organismos internacionales, como las Naciones Unidas, se unieron con el fin de realizar de manera conjunta una ley de infancia y adolescencia que de manera integral y sistematizadas permitiera actualizar a la nueva problemática social y las situaciones reales, el Código del Menor que se encontraba vigente desde 1989 (MONTALVO, 2012).

De otro lado, se buscó que la legislación que para el efecto de los niños, niñas y adolescentes se fuera a expedir, se integrara con el bloque de constitucionalidad, de manera especial, con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (BAQUERO TORRES, 2001).

Así, las fuerzas conjuntas de las entidades del Estado, la organizaciones no gubernamentales y otros actores sociales, con la teleología de actualizar el marco jurídico de la niñez, presentaron en el año 2003, ante el órgano legislativo, el proyecto 032, “concebido como una reforma integral del Código del Menor, a partir del reconocimiento del interés superior de los niños y las niñas, así como de la titularidad y prevalencia de sus derechos” (MONTALVO, 2012).
Bajo el anterior panorama, se realizó el primer debate ante la Comisión Primera del Senado de la República, no obstante fue retirado al considerarse que no contenía de manera integral una legislación que abarcara las situaciones sociales a que se enfrentaba el menor y buscando reconocerle nuevos derechos y prerrogativas que incluso tenían su génesis en la Carta Política de 1991.

Finalmente, se radicó en agosto de 2005, un nuevo proyecto, suscrito por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del pueblo, cuarenta representantes a la Cámara y cinco Senadores, que culminó con la expedición de la Ley 1098 de 2006, la cual empezó a regir a partir de mayo de 2007.

Es de relevancia manifiesta indicar la justificación por la cual se presentó el proyecto de ley, toda vez que de la misma emerge claramente la finalidad de la ley de sintonizarse con la realidad social por la cual atravesaba y atraviesa, el niño, niña o adolescente. En la mencionada motivación se indicó que la iniciativa era una acción conjunta que procuraba la protección de los niños, niñas y adolescentes, brindándoles mecanismos efectivos que permitieran desarrollar sus prerrogativas de manera eficiente, sin que fueran simples enunciados. De otro lado, lo que se buscó fue poner a tono con los tratados y convenios internacionales, la legislación que databa desde 1989, que de alguna manera no se ajustaba a las realidades sociales que vivía dicho sector de la población.

Actualmente, se ha suscitado una problemática sobre el tratamiento penal a los adolescentes, quien bajo la figura de la protección prodigada por el Estado, cometen
delitos considerados graves y no emerge una herramienta que permita no solo castigar el delito, sino también resocializar al menor y brindarle los espacios y herramientas necesarias para su desarrollo en condiciones normales.

Por ello, se hace necesario el análisis de la situación penal de los adolescentes en el sistema jurídico colombiano, partiendo de lo dicho por la Corte Constitucional, frente a los análisis que se han realizado en otros escritos y que llevan a reflexionar sobre la aplicación de la ley de infancia y adolescencia en materia penal (REPÚBLICA, 2006).

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, consagra en el artículo 139 de la Ley 1098 de 2006, que éste un proceso específico, pedagógico y restaurativo, con lo que se reconfiirma y afianza la importancia que el Estado social y democrático de derecho en Colombia, otorga y empieza a demostrar respecto además de los adolescentes, también por la figura de las víctimas en los procesos judiciales.

Es específico por cuanto el cambio respecto de la normatividad anterior (Código del Menor Decreto 2737 de 1989). Consejo Superior de la Judicatura (2010) Indica: “(…) establecía que el menor que cometía delitos se encontraba en una situación irregular y debía recibir tutela y protección del estado (p. 3)”. Situación que ha desaparecido por cuanto aquellos, son sujetos activos de deberes y derechos, en el que los daños ocasionados deben ser reparados por el mismo adolescente infractor, por sus padres o por sus representantes legales.
Es un sistema **pedagógico** toda vez que las medidas privativas de la libertad son en todo caso excepcionales, y buscan de manera preferente el internamiento (preventivo o definitivo) de los adolescentes en establecimientos especiales a cargo del ICBF, donde, y seguido por el juez se cumplen las sanciones, mecanismos en los cuales la resocialización se desarrolla bajo la figura de un sistema educativo y protector.

Es un sistema **restaurativo**, por cuanto lo que se busca es aplicar de manera preferente mecanismos de justicia restaurativa como un verdadero aporte hacia una nueva forma de justicia más apropiada para el momento actual, en donde lo importante aquí ya no es delito sino precisamente la reparación a la víctima y la participación de la comunidad.

En conclusión, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, require una verdadera intervención y compromiso político, social y administrativo; para que en los adolescentes se logre verdaderamente un adecuado proceso de resocialización. La conjugación plena y eficiente adaptación de las instituciones encargadas como el ICBF, La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, La Fiscalía General de la Nación, La Procuraduría General de la Nación, La Policía de infancia y adolescencia, y las demás entidades territoriales, conlleva a que se haga efectivo el objetivo de brindar todo el apoyo necesario para los adolescentes que infringen la ley penal.
CAPITULO II: SOCIOLOGÍA JURÍDICA Y SU RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE LA LEY

Sea lo primero precisar qué es la sociología jurídica, para posteriormente dilucidar la relación que tiene con la Ley de Infancia y Adolescencia.

Se tiene que Renato Treves, indicó puntualmente tres características que definen la sociología jurídica de la siguiente manera:

1. *Disciplina que promueve y desarrolla investigaciones empíricas para fines de carácter práctico, conectadas especialmente con la producción y aplicación del derecho.*

2. *Disciplina que tiene como objeto de estudio las relaciones entre el Derecho y la sociedad y que se divide en dos partes, una teórica y otra empírica.*

3. *Disciplina que desarrolla dos tipos de investigaciones diferentes, pero conectadas entre sí e incluso complementarias: la determinación del “Derecho libre” o derecho producido fuera de los esquemas jurídicos formales, y el estudio de la situación y función del derecho en la sociedad* (TREVES, 1988)

Corolario de lo anterior, se tiene que la sociología jurídica, es la ciencia mediante la cual se permite que la legalidad se integre a la realidad de un conglomerado social y por tanto se pueda indicar, *prima facie*, que las normas resultan efectivas.

Aplicando lo anterior a la Ley de Infancia y Adolescencia, se tiene que dentro del contexto social presentado en el territorio Colombiano y al cual se suma el endurecimiento del conflicto armado, viene ligada una problemática como lo es la
delincuencia juvenil expresada en diferentes formas, básicamente en la comisión de diferentes delitos graves que si bien tienen en la Ley 1098 de 2006, establecida una pena y la resocialización del menor, también es cierto que no ha resultado efectiva menguando ese panorama.

La realidad ha mostrado que la laxitud de las normas contenidas en la ley objeto de estudio han redundado en contra de los menores, todo porque los castigos no son proporcionales, en algunos casos, con la gravedad del delito perpetrado.

Es necesario hacer alusión al hecho que las normas nacionales no sólo deben ajustarse a los parámetros sociales, sino al contexto internacional que ha construido un bloque jurídico que repercute en la protección del niño, niña o adolescente a ultranza, verbi gratia, los tratados ratificados por Colombia ante el sistema regional de derechos humanos.

Lo anterior podría indicar, per se, que la ley 1098 de 2006 se ajusta al contexto internacional y a la obligación que de esa misma índole ha contraído. Empero, es importante conjurar lo prescrito por la norma, como lo que acontece socialmente.
CAPÍTULO III: TEORÍA COMUNCIACIONAL DEL DERECHO Y SU
RELACIÓN CON LA LEY 1098 DE 2006

Una vez vista la importancia de la sociología en la aplicación del derecho, si se tiene en cuenta que esta permite analizar la realidad social y aplicar las normas conforme a ella o sugerir su cambio, es relevante hacer alusión a un mecanismo adicional que permite, en consideración personal, la concreción del derecho con la realidad social, esto es, la comunicación.

Es necesario precisar que la teoría comunicacional del derecho está conformada por un entramado conceptual admirable especialmente por la manera en que relaciona sus conceptos para dar vida a un verdadero sistema explicativo de lo que el derecho significa.

Las categorías de ordenamiento y sistema, llevan a interrelacionar a los enunciados normativos, las decisiones que les dan vida, a los ámbitos comunicativos y lingüísticos en que se mueven y las normas resultantes del proceso de depuración conceptual de los juristas para concluir que el derecho es el resultado de dichas interrelaciones, el derecho emerge de la sociedad y por ello es comunicacional.

En otro sentido, la teoría comunicacional sostiene que todo ordenamiento jurídico representa una perspectiva textual para entender y valorar el conjunto del mundo jurídico. El carácter perspectivista del ordenamiento no sólo implica que desde él se “ve” la realidad exterior en bosquejo, a través del texto (ROBLES MORCHÓN, 2013).
Las normas se han expedido bajo una serie de debates que en principio se presentaron bajo la premisa "protección a la infancia y a la adolescencia". De hecho, al analizar los debates previos a la expedición de la mencionada ley, el argumento central jurídico se enfatizaba en la salvaguarda de los derechos de los niños, su protección a ultranza y ello se evidencia en diferentes normas.

Sobre ese particular, se pueden traer a colación los artículos 169 y 178, en los que se indica que la norma tiene una finalidad restaurativa, pero la teleología de la norma es la protección, en la que no se evidencia la proporción en la sanción de un delito grave lo que ha conllevado a entender que la norma es permisiva.

No quiere indicar lo anterior que los beneficios de actualizar la ley de infancia y adolescencia sean superiores a sus falencias, lo que si sucede es que se ha menguado su efectividad.
CAPITULO IV: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

Abordados los temas de sociología y comunicación del derecho, es preciso hacer un estudio judicial del tema objeto de análisis, teniendo en cuenta que es en la actividad judicial donde emerge la aplicación de la norma donde se pretende absolver el siguiente interrogante: ¿Es la justicia juvenil un problema de visiones jurídicas o de realidades sociales?, ello porque los problemas que suscita la justicia juvenil están atravesados por las distintas concepciones jurídicas o sociales que tratan de abordar el tema de los jóvenes infractores de la ley.

Vale la pena indicar, en los diferentes espacios institucionales del Estado, que están directamente relacionados con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y la sociedad civil, no es difícil percibir que la categoría de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos no deja de ser una retórica institucional que se enquista en el discurso oficial de los funcionarios públicos y de las instituciones sociales no gubernamentales que forman parte del Sistema, como operadores para la intervención. Dichas instituciones todavía no han podido generar un cambio en su estructura, que reconfigure un mundo simbólico y significante distinto, que les permita interpretar la complejidad existencial de los adolescentes dentro de un mundo globalizado; pero que al mismo tiempo es segregado por factores culturales, políticos y económicos, que aunque no mal, si han generado un proteccionismo a ultranza difícil de erradicar.
Se parte de la premisa que indica que dentro del esquema del sistema jurídico colombiano, se admite la responsabilidad penal de los adolescentes, cuando han cometido acciones que se constituyen en infracciones a la ley penal. Cuando ello sucede, se despliegan una serie de actuaciones administrativas y judiciales que tienen que desarrollarse sobre tres fundamentales funciones: la protección del menor, su educación y la resocialización, las cuales atiendes a las garantías reforzadas de las que son titulares en consideración a su especial vulnerabilidad (Corte Constitucional, 2009).

De otra parte, en los procesos en los cuales se investiga o juzga a un menor de edad, se debe dar plena aplicación al derecho de debido proceso, las cuales además de encontrarse protegidas en la Carta Política, son consagradas en los diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que refleja un catálogo extenso de derechos que forzosamente se han de aplicar en la actuación judicial, *verbi gratia*, el principio de favorabilidad, la presunción de inocencia, el juez natural, entre otros.

La égida del proceso judicial en materia penal para adolescente, se levanta sobre la siguiente premisa, extractada de lo contemplado en la Constitución Política, los tratados internacionales y la Ley 1098 de 2006:

El sistema de responsabilidad penal de los menores de edad se ha de caracterizar por ser diferente de aquel que se aplica ordinariamente a los adultos, y debe ser específico en el sentido de atender cuidadosamente al nivel de desarrollo físico y mental y demás circunstancias relevantes de cada menor acusado de desconocer la ley penal. (Corte Constitucional, 2005)
Lo anterior, resulta reforzado con lo dispuesto en las Reglas de Beijing, en las que se establecieron una serie de reglas, de las que se cita, para efectos del análisis que se ha de desarrollar una de las que en consideración personal hace alusión al proteccionismo de los menores bajo el sistema de responsabilidad penal y es la que se traduce en el hecho de que la detención solo procede en cinco casos a saber, sólo puede aplicarse como última opción y en un lapso breve, si es posible, debe sustituirse por otra medida educativa, en caso de efectivizarse la detención debe separarse al menor de los adultos y finalmente, en el término de detención el menor debe recibir el cuidado protección y asistencia que requiera.

La Corte Interamericana no ha sido ajena a la aplicación de las reglas especiales de protección en el evento en que hayan sido cometidos por menores de edad, indicando que:

_Si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños el ejercicio de aquéllos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran los niños, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías. (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2004)_

Según lo indicado, se requieren de especiales condiciones para el adelantamiento de un juicio de un menor, inicialmente bajo la premisa que antes que tener que someterlo a un proceso, es necesario adoptar otras medidas; en el caso de adelantar el proceso judicial, debe proveerse al menor de un asesoramiento sicológico y debe darse una adecuada publicidad del proceso, para evitar que sean sometidos al escarnio público.
CAPITULO V: DERECHO COMPARADO

En el presente acápitate se quieren incorporar las experiencias de otros Estados en la aplicación de la responsabilidad penal de los niños, niñas y adolescentes, para lo cual se han de tomar como referentes: Costa Rica y Chile, analizando la aplicación de dicha responsabilidad en los mismos.

En Costa Rica, el establecimiento de un sistema de responsabilidad penal para adolescentes, surgió con asesoramiento de la UNICEF, buscando la sistematización de las normas que proliferaban sobre la materia, especialmente lo atinente a las sanciones privativas de la libertad y con la teleología de hacer posible la resocialización del menor y la sostenibilidad de un nuevo sistema de sanciones (UNICEF, 2006).

El proceso para la judicialización de los menores de edad en Costa Rica puede destacarse, según los informes de organismos internacionales, por la participación conjunta y el compromiso de los actores estatales, buscando más que la penalización la aplicación de medidas que en efecto redundan en la reducción de la impunidad y en la formación educativa de los menores. Muestra de ellos es que en el año 1995, se tiene reporte de 128 menores de edad en los centros de reclusión, en tanto que en el año 2003, dicha suma había menguado a 34, lo que se logró con la aplicación del margen de discrecionalidad que la misma ley concede a los jueces y la aplicación de las sanciones alternativas para aquellos menores que han cometido los delitos de hurto simple o daños
en la propiedad, a lo que se sumó el apoyo comunitario, previsto en la misma normatividad, para el desarrollo de los servicios sociales (UNICEF, 2006).

Ahora bien, otro sistema de referencia, es el chileno, allí la normatividad vigente data de 1967, lo que se traduce en que socialmente y con el devenir del tiempo no se ajusta a la realidad social y mucho menos a las exigencias internacionales.

Se ha evidenciado en la sociedad chilena que un menor que ha cometido un delito, puede reincidir en un futuro, aún cuando se le haya proferido al infractor una medida de protección, pues se ha presentado el caso de quien en la minoría de edad al ser juzgado se remitía a un albergue para purgar su sanción y al considerar su estado de abandono por parte de sus familiares, ese caso se considera reincidente.

Una falencia adicional del sistema chileno, es que no permite diferenciar el juzgamiento de los mayores de 16 años y menores de 18 como adultos, en atención a la declaración de discernimiento que muchas veces se basa en que a un adolescente se tiene considerado de alta peligrosidad, atribuida más que a su capacidad de discernir al hecho altamente gravoso (CHILENO, 2002)

Chile, ante los organismos internacionales, se convierte en uno de los estados con la legislación más deficiente en materia de infancia y adolescencia, con el aliciente que los cambios legislativos son lentos y por ende las reformas judiciales no son inminentes. En otras palabras la legislación chilena se concreta en un panorama violatorio de los
derechos humanos de la niñez, siendo necesario la creación por parte de la UNICEF de un sistema de Defensa Judicial de los menores.
CAPÍTULO VI: LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL SISTEMA PENAL DE ADOLESCENTES EN COLOMBIA

La ley penal juvenil concierne a los diferentes sistemas de administración de justicia existentes en el mundo, los cuales asumen la responsabilidad de responder jurídicamente a la problemática de infracción a la ley penal cometida por adolescentes, asumiendo que la sociedad debe reaccionar ante las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes (menores de 18 años), de manera diferente a la justicia ordinaria para los adultos. Establece entre sus lineamientos:

- Perseguir objetivos específicos correspondientes a la infracción a la ley penal cometida por adolescentes y que, por lo tanto, son diferentes a los planteados en la justicia penal para adultos.
- Aplicar sanciones que le son propias.
- Atender a reglas de procedimiento penal, también diferentes.
- Integrar al adolescente acusado de haber infringido la ley, más que a excluirlo.

El debate filosófico y académico en el sentido de si el origen de la justicia para adolescentes se encuentra bajo una noción ligada a los complicaciones familiares o a la educación, o si se encuentra únicamente unidos a los temas metafísicos y religiosos, o si por el contrario, obedece a un tema ligado a la naturaleza humana, persiste en la actualidad; pero tal debate es irrelevante. La realidad es que tal noción está arraigada en la conciencia general de una sociedad organizada y civilizada; en ese orden de ideas, se
hace necesario establecer una doctrina que desarrolle de forma detallada esa concepción; la creación y el reconocimiento de normas claras permiten en una comunidad el correcto ejercicio de interacción y convivencia pacífica.

El debate académico alrededor del concepto de justicia y sus fuentes es amplio, sin embargo, es posible hacer una categorización amplia y reducirlo a la tensión en términos de si es natural (Iusnaturalista) o si es un ejercicio racional (Positivismo). La visión positivista, tiene gran influencia de la visión filosófica de que es necesario establecer reglas para lograr el control social y la justicia, que en su estado natural los seres humanos no optan por valores de justicia y que por ende es necesario desarrollar una doctrina jurídica y depurar los procesos para su aplicación, ya que lo justo se logra a través del ejercicio racional de la argumentación y es esta la vía para mantener la paz en la sociedad. Así pues, las leyes son el mejor instrumento para la búsqueda de la justicia, y se confía en su sustento racional para resolver el problema de la injusticia. (Britto, 2010, p. 12).

El primer tópico que un debate filosófico debe abordar, en procura del consenso que permita avanzar en la construcción de la definición de la justicia, es entender claramente que lo que se considera estrictamente legal, no se encuentra necesariamente ligado en lo que se entiende y acepta por el concepto de lo justo; es decir, el concepto de justicia y el concepto de ley, no son sinónimos, no se pueden apreciar desde la misma perspectiva; superado este debate, se puede entonces determinar que la justicia no es una noción
rígida, sino por el contrario un elemento dinámico y cambiante, instaurado en una sociedad de las mismas características.

Es evidente la crisis del derecho penal y de la justicia meramente punitiva, en donde los logros de un verdadero proceso de resocialización no son suficientes, por lo cual la justicia juvenil trasciende el abordaje de los procesos en conflicto con el derecho penal. Esta nueva concepción de justicia comprende además aspectos muy novedosos como son entre otros: Y prevención de la delincuencia juvenil, intervención extrajudicial, restauración del daño, el análisis de cada situación en particular y sobre todo el enfoque restaurativo, haciendo un llamado al análisis global de la situación y la sanción que en definitiva presenta aspectos más formativos que punitivos; además de ser innegable la solicitud de participación de la población.

8.6.1 Los resultados del sistema actual de atención de infracciones cometidas por los adolescentes.

Interpretar los resultados de un sistema jurídico como el de Responsabilidad Penal para Adolescentes, es por sí mismo una tarea compleja, que sin embargo conlleva además, una fuerte necesidad de valoración individual de los fenómenos que componen la problemática que en este artículo es materia de análisis. Examinemos sólo una pequeña muestra de los datos que fueron recolectados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F). Según el informe presentado en el año 2012, en el cual se lleva a cabo una comparación de las circunstancias más relevantes en el ámbito de infracciones
cometidas por adolescentes y que permitirá situar un contexto actual de este escenario social.

De los procesos acumulados entre el 1° de abril de 2008 al 31 de diciembre del año 2012, se presentaron los siguientes datos: De las 1474 infracciones cometidas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 1368 fueron cometidas por adolescentes de tipo masculino, y el restante es decir, 106 fueron cometidos por adolescentes femeninas. Estas cifras deben ser interpretadas con todas sus restricciones, por ejemplo: Las cifras no permiten siquiera inferir si las infracciones fueron cometidas bajo qué circunstancias.

Los datos respecto de este tipo de infracciones no permiten advertir si aquellas fueron cometidas en razón de una necesidad personal o familiar de los adolescentes arrestados, y si dentro de las mujeres, aparece alguna relación con casos de madres prematuras o adolescentes, o si por el contrario obedece a casos de necesidad de recursos para la obtención de algún tipo de alucinógeno o por alguna circunstancia personal que lo induzca suplir necesidades básicas.

En conclusión, se puede observar que efectivamente los datos recolectados permiten reconocer que los ámbitos de infracciones penales cometidas por adolescentes, obedecen a situaciones que conllevan y exigen un cambio de paradigma educativo, cultural y sobre todo jurídico; la generación de políticas públicas diferentes que permitan

---

1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Informe sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes Regional Risaralda - Distrito Judicial Pereira (Consolidado Risaralda 30-12-2012).
una verdadera atención social de los adolescentes en procura de su rehabilitación y educación.

Podemos observar, el esfuerzo continuo de las instituciones del Estado, en crear y regular medidas tendientes al mejoramiento del sistema, en pro de cumplir los cometidos constitucionales como un verdadero Estado Social de Derecho, voluntades que como indica el “Boletín Especial, Observatorio del Bienestar de la Niñez No. 1, Adolescentes en Conflicto con la Ley, SRPA”:

Ante este panorama, el ICBF viene desarrollando diferentes programas y estrategias tanto para la prevención de la ocurrencia del delito, como para evitar la reiteración del mismo. Entre estas se destacan: De Cero a Siempre, Generaciones con Bienestar con una inversión de 38.000 millones de pesos, 210.000 jóvenes vinculados al programa en más de ochocientos municipios, Familias con Bienestar, Encuentros de Familia, y el Observatorio del Bienestar de la Niñez, las cuales tienen como propósito asegurar el bienestar de los niños para reducir su vulnerabilidad y el riesgo de incurrir en conductas punibles. (2012, pág. 3).

Las entidades encargadas de generar y aplicar las soluciones para este tipo de comportamientos, deben implementar medidas de resocialización más efectivas, pues ante su dedicación y tenacidad para fomentar adolescentes constructivos, no alcanza a cumplir su cometido, pues éste proceso de rehabilitación se ve estancado al finalizar, ya
que este mismo informe indica que varios de los adolescentes, que están vinculados al SRPA; son reincidentes de dichas conductas.

Por ello debe ser óbice de análisis, si el sistema realmente está siendo efectivo en la implementación de los programas restaurativos habilitados por el SRPA, toda vez que en la mayoría, el Estado no alcanza a cumplir con la función garantista, de ofrecer a nuestros adolescentes un mejoramiento a las condiciones sociales en las que actualmente muchos de los jóvenes de nuestra sociedad se ven abocados para resarcir necesidades vitales; no obstante, comprendido lo anterior, para impedir el total descargo de responsabilidad hacia al Estado, es importante concluir que nuestro ámbito actual se encontrará continuamente frente a retos legales y sociales. Como se ha mencionado desde el inicio de este artículo, el constante avance social y cultural, conlleva a sucesivos cambios avocando al legislador en la implementación de nuevos articulados que ataquen los conflictos vigentes, pero no sólo es responsabilidad de éste la ejecución de mecanismos para la solución de conflictos; como comunidad debemos ser partícipes, ya que la indiferencia social nos involucra de igual forma como responsables solidarios ante esta problemática.

Se evidencia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que ha habido un atraso para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1098 de 2006 y máxime en lo que tiene que ver con la sanción de retención, toda vez que el artículo 162 de la misma, impone la obligación a los municipio donde no existe un sitio adecuado para la reclusión de menores, ellos deben entregarse a sus familias, lo que se traduce que en los casos de flagrancia, ellos se conducen a sus casa, en tanto no exista la
planta física especial que los mantenga en condiciones especiales o mientras tanto conceder la libertad provisional o detención domiciliaria.

Aunque de una lectura apresurada de la norma emerge que la solución sería la construcción de centros especiales de reclusión, la misma resulta equívoca puesto que

*Lo que la Ley pide es la adecuación de lugares en todos los casos separados de los adultos donde se puedan surtir las 36 horas siguientes a la aprehensión. Justamente para ello las Naciones Unidas a través de sus reglas han concebido parámetros mínimos que deben tener los lugares a donde van los menores de edad. (SRPA, 2011)*

La Alianza para la niñez, en el año 2009, pudo constatar que los adolescentes que han sido aprehendidos en las entidades territoriales que no cuentan con sitios para la detención de los adolescentes, han sido trasladados a las Comisarías de Familia y a través de ellas, se efectúa su entrega a los padres de familia, sin que los delitos puedan ser judicializados, lo que genera impunidad y malestar en la comunidad frente a este tipo de situaciones. El problema es que la judicialización se está asociando con la existencia de un centro especial de reclusión y no con la falta cometida, pues conforme la Ley, un delito siempre debe ser, se repite, judicializado. Ello conlleva a que las autoridades cumplan sus funciones legales, pero acrecenta la impunidad.

Es imperioso que el aparato estatal fortalezca la política penal de adolescentes, en cuanto a la atención social y económica de todos los actores que deben concurrir al sistema penal para éstos, garantizando un proceso de socialización para que efectivice
“entornos protectores, que los acojan y que faciliten el ejercicio progresivo de su autonomía y su ciudadanía en el marco del respeto de los derechos humanos suyos y de las demás personas”. (COLOMBIA, 2010)

No debe obviarse que la finalidad de la Ley de infancia y adolescencia, más que el castigo de un menor infracto es su resocialización, ese objetivo altruista a su vez no se puede cristalizar si se deja a un lado la sanción que debe cumplir el adolescente que ha cometido un delito. Así se establece en el artículo 140 de la Ley 1098 de 2006, en la que se dispone que las medidas deben ser pedagógicas, específicas y diferenciadas de las aplicadas a los adultos; empero deben asegurar el cumplimiento de la justicia restaurativa evidenciada en la verdad y la reparación de las víctimas.

Una situación adicional, es que la reparación no es monetaria cuando se trata de adolescentes, sino que se busca que el menor reconozca la ilicitud de su acto, el daño causado y por ende la restauración de la dignidad de la víctima y de su propia dignidad.

Los periódicos nacionales han hecho eco de la situación de los menores y su responsabilidad penal, precisando que existe en la actualidad un caos en el sistema penitenciario de éstos y se ha reconocido por el mismo Gobierno, partiendo del hecho del hacinamiento en los centros de reclusión, que el presupuesto se torna insuficiente para atender las necesidades de infraestructura aunado al hecho del incumplimiento de los programas de resocialización a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las entidades territoriales.
Por ser un modelo jurídico que busca integrar a las partes de una forma más amplia, la justicia restaurativa conlleva una participación activa de la comunidad, en la cual la prevención juega un papel importante, un verdadero modelo jurídico no tiene su inicio con la aparición de las infracciones, antes de ella, la justicia como elemento restaurador y pedagógico de los fenómenos sociales controvertibles, identifica y aborda de raíz las causas de los comportamientos criticados y no únicamente de los efectos del mismo. A lo largo de la historia muchos de los más importantes doctrinantes de la materia del derecho y la justicia han establecido esa importancia, pero tal parece que los sistemas sociales no han otorgado la importancia que esta actividad significa para el contrato social que significa la convivencia en una comunidad organizada y pacífica.

La posición es análoga en el campo del derecho y en el de la medicina: a los abogados y a los jueces se los llama como a los médicos, cuando se declaran las enfermedades; pero a fin de que no se declaren, es necesario, difundir en el pueblo conocimientos elementales de higiene. Después de todo, una cierta educación jurídica extendida a los no juristas, es un medio para combatir a las dos plagas sociales que son la delincuencia y la litigiosidad. (Carnelutti, 2008, p.2).

Cuando el Estado, la sociedad y el individuo articulen los esfuerzos y se creen y afiancen las instrucciones encargadas de la atención y prevención de las infracciones de adolescentes, la justicia para este tipo de casos dejará como es debido, de ser referente y punto de partida, dejará de ser protagonista en la evolución de la sociedad.

La justicia restaurativa en la sociedad colombiana necesita, más aun en el modelo de justicia para adolescentes, encarnar los principios y los valores que representa este
nuevo paradigma, sistema implantado para la resolución de controversias en las cuales, el futuro de la sociedad – los menores – ocupan un lugar privilegiado, sin olvidar que esa misma relevancia que se le otorga, la sustenta también la víctima o víctimas del proceso, pues es a ellos al final a quien más los afectan tanto las infracciones cometidas por los adolescentes, como la justicia resultante del proceso, cuando la víctima es la encargada de informa cual es, dentro del respeto, el orden y la dignidad que exige una sociedad civilizada, la exigencias para que a su sentir se haga una justicia verdadera acorde con sus intereses y perspectivas; entonces se iniciará un ejercicio verdadero en la resolución de controversias mucho más cercano a los principios de la noción de justicia que descansa en la consciencia colectiva de la sociedad.

La implementación de un modelo de justicia restaurativa para adolescentes en Colombia hace necesario en primer lugar, la reflexión y generación de un nuevo modelo que se aparte de la estructura tradicional de atención para infractores juveniles. En la actualidad, el modelo utilizado para la atención de este tipo de fenómenos es una fiel copia del modelo implementado para la atención de delitos cometidos por adultos, que es a su vez una burda imitación del modelo Norte –Americano; craso error de percepción social, pues resulta evidente a la luz de la sociología, que la sociedad y las capacidades de estos, son diametralmente diferentes a las necesidades y capacidades del Estado colombiano, y más aún de su sistema de atención para adolescentes.

Es entonces de vital importancia recordar que las diferencias culturales en los adolescentes a nivel internacional y nacional, conlleva la necesidad de abordar este tipo
de fenómenos desde perspectivas diferentes, visiones y criterios que se ajusten con las características particulares de sus comportamientos, desarrollo y medio; empero esa situación es propensa a un error de percepción por parte de los estamentos estatales encargados de las políticas públicas en materia de justicia juvenil. De Bono (1997) afirma: “la mayor parte de los errores de criterio son errores de ese tipo” (p.32).

No sólo la implementación de justicia, de verdadera justicia, hace necesaria la presencia de mecanismos y de instituciones eficientes, que de forma simultánea y conjunta logren la recta y eficaz impartición de justicia; pero dicha eficiencia en el sistema jurídico colombiano se predica desde el punto de vista de la calidad como característica principal. El estado a través de sus instituciones jurídicas, otorga mayor importancia a la celeridad en busca de la cantidad de procesos que se logran evacuar, y no la calidad o la efectividad de sus resultados. En el estado colombiano, el protagonista de las controversias judiciales, el núcleo del ejercicio jurídico, es el castigo y la represión para con el victimario y no la satisfacción y reparación de las víctimas.

La educación como elemento esencial de la construcción social en un Estado democrático y participativo como el colombiano, debe procurar por abandonar la formación contradictoria y la tendencia competitiva entre sus asociados y más aún entre los individuos encargados de administrar y de impartir justicia; no en vano, la implementación de los mecanismos de solución alternativa de conflictos, empezó a ser un instrumento, no sólo importante en la convivencia y resolución pacífica de las controversias, sino exigible para la atención de los mismos; la instrucción de esta
materia hacen parte ya de los contenidos pedagógico de las instituciones que abandonaron el paradigma adversarial y castigador que se fomentó por largo tiempo en las aulas de clase y que reconocieron y adoptaron un nuevo sistema para dirimir las controversias jurídicas de una sociedad. No podemos olvidar que al igual que la justicia transicional que se promulga por estos días en Colombia, la justicia restaurativa es un proceso en construcción que necesita: Análisis, comprensión, tolerancia y un fuerte interés de implementación; pero todos estos elementos, articulados entre sí, desde la perspectiva de que como nación, contamos con una identidad propia que reclama sistemas sociales acorde con sus características.

8.6.1.2 Experiencias exitosas en materia de justicia juvenil

Ahora bien, teniendo en cuenta que estamos analizando la justicia restaurativa en el SRPA, anotando algunas de sus deficiencias y virtudes, es de resaltar el proyecto Niñez Sin Rejas, el cual es un proyecto que impulsa políticas que buscan garantizar los derechos de los adolescentes en aprietos con la ley; vinculando a éstos como individuos facultados de derechos, ubicándolos en un plano de justicia juvenil restaurativa, siendo parte de este proceso su familia, sus amigos y toda la comunidad que lo rodea, con el fin de que el joven infractor sea ressocializado integralmente. Es un proyecto implementado en América Latina, el cual ha tenido un gran éxito, puesto que su objetivo ha sido orientado en evitar la exclusión familiar, social y laboral, atravesado por un joven después de su actuar delictivo, mediante asambleas comunitarias, entre otras. Esta labor, consiste plenamente en identificar las falencias socioeducativas tramitadas por el Estado en las
políticas públicas de justicia juvenil, apoyando estas debilidades por medio de Niñez Sin Rejas.

En el caso de Colombia, se realizan talleres de maternidad y paternidad con los adolescentes, en donde, por medio de un recurso didáctico llamado maletín educativo se impulsan los juegos tradicionales de nuestro país, con el fin de que los jóvenes, tengan un entorno sano, así mismo practican conferencias, seminarios, para generar una retroalimentación; técnicas implementadas también en países como Perú, Ecuador y Guatemala, entre otros.

Es de anotar, que en América Latina, en los países donde se han implementado estas políticas públicas, aún hace falta infraestructura que permita el pleno desarrollo de dichos programas, dado a que la publicación de Niñez Sin Rejas, nos permite dilucidar esta falencia, incidencia que impide su desarrollo plenamente.
9. CONCLUSIONES

La realidad ha mostrado que la laxitud de las normas contenidas en la ley objeto de estudio han redundado en contra de los menores, todo porque los castigos no son proporcionales, en algunos casos, con la gravedad del delito perpetrado.

Es necesario hacer alusión al hecho que las normas nacionales no sólo deben ajustarse a los parámetros sociales, sino al contexto internacional que ha construido un bloque jurídico que repercute en la protección del niño, niña o adolescente a ultranza, verbi gratia, los tratados ratificados por Colombia ante el sistema regional de derechos humanos.

Lo anterior podría indicar, per se, que la ley 1098 de 2006 se ajusta al contexto internacional y a la obligación que de esa misma índole ha contraído. Empero, es importante conjurar lo prescrito por la norma, como lo que acontece socialmente.

Las normas se han expedido bajo una serie de debates que en principio se presentaron bajo la premisa "protección a la infancia y a la adolescencia". De hecho, al analizar los debates previos a la expedición de la mencionada ley, el argumento central jurídico se enfatizaba en la salvaguarda de los derechos de los niños, su protección a ultranza y ello se evidencia en diferentes normas.
Sobre ese particular, se pueden traer a colación los artículos 169 y 178, en los que se indica que la norma tiene una finalidad restaurativa, pero la teleología de la norma es la protección, en la que no se evidencia la proporción en la sanción de un delito grave lo que ha conllevado a entender que la norma es permisiva, ello partiendo del análisis que se hace a la realidad social.

No quiere indicar lo anterior que los beneficios de actualizar la ley de infancia y adolescencia sean superiores a sus falencias, lo que si sucede es que se ha menguido su efectividad.

Así pues se condensas las conclusiones en los siguientes ítems:

- El actual sistema de responsabilidad penal para adolescentes que se desarrolla en Colombia, debe poner mayor énfasis en el enfoque de la Justicia Restaurativa, por cuanto en las experiencias y desarrollo del mismo, son muy escasas las manifestaciones concretas de esta práctica restaurativa y todavía se identifican acciones meramente punitivas. Solo a partir de este cambio de prisma es que se generara una transformación real en el proceso de resocialización de los jóvenes infractores.

- Los principales fenómenos de delincuencia juvenil tienen su génesis en escasa formación de principios y valores del menor en su entorno social. Se debe procurar un fortalecimiento educativo en estos aspectos, tanto a nivel escolar como familiar; es necesario reformular las políticas educativas, no sólo para el
acceso a los programas básicos de educación, sino que dentro de ellos se deben afianzar o crear si es del caso, programas educativos dirigidos a la formación moral y ética de los jóvenes en un sistema social intercultural y dinámico, donde sea la familia como célula de la sociedad, la que fortalezca los vacíos morales del individuo; para que éste sea integrado y no aislado.

- Un cambio de paradigma en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, exige una estructuración sistematizada de las normas que la regulan y el funcionamiento de éstas acorde con las normas internacionales, pero dentro de los parámetros de respeto por la formación social y cultural del individuo. De igual forma, es indispensable la formación de todos los operadores del sistema bajo la clara convicción del respeto y el cambio de paradigma en la atención de los fenómenos delictuales juveniles, como un principio necesario para la correcta evolución y aplicación del nuevo sistema, para que de esta manera, las políticas que realmente importan, las sociales, y no ceñirse a las procedimentales.

- Se hace necesario crear y promulgar políticas encaminadas en un tipo de justicia en la cual exista una interacción entre la víctima y el adolescente infractor, pues ello aliviana las cargas existentes entre las partes, dándose la oportunidad de crear un sistema más conciliador y menos sistemático.
10. BIBLIOGRAFÍA


CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-689 (2009).
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-203 (2005).

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso del Instituto de
Reeducación del Menor (2 de septiembre de 2004).

MONTALVO, J. (2012). Antecedentes de un hito histórico para la infancia y la
adolescencia en Colombia. Medellín: Universidad de Antioquia.


veintiuno. Volúmen 1(.)

(2a Edición).

Martínez, J.A. (2012). Resultados primarios en el Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes: evolución o involución de un sistema con vocación de reforma,
Memorando de Derecho, 3(1).
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Informe sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes Regional Risaralda - Distrito Judicial Pereira (Consolidado Risaralda 30-12-2012).


**Webgrafía**


(Consultado el 04 de Diciembre de 2015).
Boletín Especial, Observatorio del Bienestar de la Niñez No. 1, Adolescentes en
Conflicto con la Ley, SRPA.

Disponible en:

Http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Programas%20y%
20Estrat%C3%A9gias/ObservatorioBienestar (Consultado el 04 de Diciembre de
2015).

Niñez Sin Rejas. Disponible en:

d=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipjj.org%2Ffileadmin%2Fdata%2Fdo
cuments%2Freports_monitoring_evaluation%2FBICE_EnfanceSansBarreaux_2012
_SP.pdf&ei=qMqnUtKbG5DPkQeGmoGgCA&usg=AFQjCNHxeHpukdW_MDdL
B3rWxP7vrBwZQ

(Consultado el 04 de Diciembre de 2015).


Pereira: Universidad Libre.


Barcelona: Ariel.


SABER, CIENCIA Y LIBERTAD en germinación, Universidad Libre, Cartagena de
Indias 2010
http://200.30.74.19/Descarga/PDF/SCL%20VOLUMEN%203%20JULIO%202010.pdf#page=73
Con la presente me permito informarles que al proyecto titulado “ANALISIS DE LAS CAUSAS DE LA DELINCUENCIA JUVENIL Y LA EFECTIVIDAD DE SUS SANCIONES EN LA CIUDAD DE CARTAGO- VALLE DEL CAUCA EN LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DE 2013 A 2015” se le realizó corrección de texto, que comprende la revisión de redacción, ortografía y estilo, aplicando las normas APA según la 6th Ed., en su Contenido, Pie de Páginas, y Bibliografía.

Agradezco de antemano la atención prestada y su confianza depositada.

Viviana Martínez G